



## POLITICA: PARTICIPACION Y MARASMO

*Carlos Pereyra*

I.- Los elevados índices de abstención en los procesos electorales de nuestro país, presumiblemente mayores a los reconocidos en las cifras oficiales, no son signo inequívoco de repudio a tales procesos electorales, aún si una proporción considerable de quienes desertan de las urnas lo hacen, en efecto, llevados por un arraigado escepticismo que se ha ido sedimentando al calor no tanto de los ocasionales fraudes como de la erosionada credibilidad de los procedimientos electorales en México. En cualquier caso, el abstencionismo es también síntoma de la escasa participación política observable en nuestra sociedad. Se trata de un fenómeno que aparece como resultado de actitudes y creencias heterogéneas más o menos difundidas en la población: a) el convencimiento de que el voto no se

respetar; b) indiferencia por los asuntos públicos; c) desapego al conjunto de las fuerzas políticas participantes. Con frecuencia, críticos del sistema político mexicano sostienen que el abstencionismo "ha sido tradicionalmente la forma de rechazo popular al estado de cosas...la más clara forma de resistencia a un régimen y a sus prácticas" (Luis Javier Garrido, *La Jornada*, 13 de Abril de 1985).

No hay estudios empíricos capaces de informar con precisión sobre los motivos de la abstención pero, sin duda, es insostenible la idea de que constituye "la más clara forma de resistencia al régimen". Es más consistente con el resto de nuestros conocimientos sobre la vida política nacional, la hipótesis de que el grueso de la abstención deriva de la escasa formación política de quienes así actúan y sólo para un reducido porcentaje de personas opera como forma deliberada de rechazo al sistema político. En efecto, es muy probable que la deserción de las urnas sea consecuencia en la mayoría de los casos de un insuficiente grado de integración en la sociedad global y, en segundo término, de la convicción nítida de que el voto es inútil porque no hay un recuento honesto. Pero

aún en este caso se trata de una convicción inscrita en un nivel primario de politización y se expresa, por tanto, en una de las formas más pasivas e ineficaces imaginables.

La abstención, por otra parte, no es fruto sólo de la precaria credibilidad que el gobierno ha logrado conferirle a los procesos electorales, sino también de la ineficacia mostrada por los partidos para articular en el plano político la iniciativa social. Se entiende mejor el fenómeno del abstencionismo sí, en vez de interpretarlo de manera unilateral como un asunto cuya *responsabilidad* corresponde por entero al gobierno, se le examina en el contexto más complejo del cual forma parte. No puede desconocerse el hecho de que las mismas elecciones que se caracterizan por un elevado porcentaje de electores ausentes, se caracterizan también por: a) incapacidad de los partidos políticos para tener representantes que vigilen el funcionamiento de todas las casillas y, más sintomático aún, b) incapacidad de la oposición para presentar candidatos en el conjunto de los municipios o diputaciones. Estos dos hechos, comprobables en prácticamente cualquier elección local, sugieren que el abstencionismo forma parte de un fenómeno más amplio de anomia política.

Con la argumentación anterior no se pretende negar el hecho obvio de que en la sociedad hay actividad política que, sin embargo, no se expresa en los procesos electorales. Es fácil documentar la existencia de numerosos organismos sociales, cuya actividad política es sistemática y, sin embargo, renuncian de manera explícita a intervenir electoralmente en un sentido determinado. O bien se trata de organismos en cuyo interior operan en forma abierta las diversas fuerzas políticas y, entonces, la actividad realizada por esos organismos encuentra alguna traducción en el plano electoral, o son organismos cuya actividad política procura orientarse por canales excluyentes de la institucionalidad electoral. En este segundo caso no se estaría frente a una muestra de vigor político imposible de detectar en el plano electoral, sino frente a una muestra de atraso político que considera incompatible la iniciativa política de los organismos sociales y su articulación con el trabajo partidario-electoral. Más allá de los datos que arrojaran estudios empíricos al respecto, parece sensato afirmar que el abstencionismo está asociado a la debilidad generalizada de los partidos y, de manera más amplia, a la reducida participación política de la sociedad mexicana.

II.-En cualquier momento del desarrollo histórico de una sociedad, existen elementos obstaculizantes y otros propiciatorios de la participación política. Una hipótesis tentadora, en favor de la cual pueden abonarse numerosas circunstancias, es la de que en México predominaron durante varios decenios los elementos obstaculizantes y en los últimos tiempos tienden a cobrar mayor fuerza los elementos propiciatorios, a pesar de que parte de los obstáculos a la participación continúan ejerciendo su papel de lastre. Tales factores obstaculizantes operan tanto en el tejido social como en la estructura política que ha cristalizado en nuestro país y en las tradiciones ideológico-culturales; derivan inclusive del funcionamiento observado por la economía mexicana. Vale la pena pasar la revista a estos factores antes de hacer referencia a los elementos propiciatorios de la participación política.

El carácter de los agrupamientos sindicales constituye una de las barreras más serias para la participación política. Esta afirmación puede validarse en varios sentidos: 1) la falta de vida interna democrática e inclusive la ausencia de dispositivos para el desenvolvimiento del pluralismo ideológico y político, desalienta la participación de los afiliados quienes no forman un conjunto de miembros informados y preocupados por su organización, la preparación de nuevos dirigentes, la intervención del sindicato en la dimensión pública, etc., sino una masa alejada de su forma orgánica inmediata. Sindicatos sin asambleas regulares, procedimientos electorales abiertos, conexiones precisas entre la dirección y la base, han terminado por actuar no como canales de participación sino como aparatos de contención; 2) la subsunción de los sindicatos en el partido del Estado genera a primera vista la sobrepolitización del sindicalismo, pues éste ya no es un simple vehículo para la defensa de intereses gremiales, sino una institución con funciones políticas definidas. Expresión cuantitativa de esta apariencia son los millones de miembros que el PRI dice tener y quienes jamás se comportan, es obvio, como militantes de partido, pues en verdad no lo son. Si bien la integración de los sindicatos (así como de las organizaciones campesinas, por supuesto) en el PRI, no tiene la menor eficacia para promover la actividad política de los afiliados, en cambio sí se convierte en fuente de compromisos ideológicos y políticos para la institución que restringen su horizonte de acción. Si la política gubernamental ha estado marcada en alguna medida por la necesidad de atender la base social



en que se apoya el partido oficial, es decir, si las organizaciones sociales han tenido alguna presencia en la toma de decisiones, es más fácil documentar hasta qué grado la política sindical se desdibuja por la necesidad de mantener sus lazos con el gobierno. No importa cuáles han sido los beneficios particulares que la burocracia sindical ha derivado de esa integración *contra natura* en el PRI, lo cierto es que ello liquida las posibilidades de acción política propia del sindicalismo; 3) no obstante la abundancia de documentos y declaraciones de la dirección sindical en favor de cierta política económica, su eficacia como elemento de presión está muy disminuida por la falta de autonomía sindical y la incapacidad para movilizar e impulsar la participación de los afiliados.

La estructura antidemocrática y hostil al pluralismo, la transformación de los organismos sociales en apéndices del partido oficial y la escasa o nula autonomía debido a su sometimiento al aparato de gobierno, siegan en gran medida las posibilidades de esos agrupamientos como lugares de participación política. A pesar de ello, la situación es más grave donde ni siquiera existe esa versión deformada de la organización gremial. En México suelen manipularse cifras muy abultadas de trabajadores sindicalizados. Investigaciones al respecto indican que "el número superior de sindicalizados que se considera como más factible es 3.5 millones de trabajadores. De ser esta cifra la real, en México estaría sindicalizada cerca de la quinta parte de la población económicamente activa" (C. Zazueta, 1978). No sorprende esta baja tasa de sindicalización, si se recuerda que jornaleros agrícolas, empleados de comercio y numerosos asalariados de la pequeña empresa permanecen sin organización gremial. Gente que no está inscrita en organismos sociales tiene menos probabilidades de establecer vinculaciones políticas, e inclusive de obtener información suficiente para identificarse, aunque sea a distancia, con una agrupación política.

Es todavía más improbable el acceso a la participación política para millones de subempleados, quienes no sólo carecen de organización social, sino de una relación laboral estable. No se trata de un *ejército industrial de reserva* con alguna experiencia laboral interrumpida por despidos o reajustes de personal, sino de una masa de reciente incorporación en la vida urbana, arrancada a las formas de socialidad rural y lanzada a un nuevo espacio cuyas formas específicas de socialidad le

son ajenas. Sin relaciones salariales fijas y en un mundo extraño, tiene que transcurrir largo tiempo para que millones de personas desplazadas del campo a la ciudad estén en condiciones de alguna participación política. Despojados de los vínculos comunales propios del mundo campesino, toma tiempo y esfuerzo la constitución de otras formas de vinculación social desde las cuales pueda generarse participación política.

El centralismo del sistema de gobierno es otro obstáculo a la participación política. Los niveles locales de gobierno, en tanto actúan más como prolongaciones del gobierno central y muy poco como expresión de la comunidad local, en vez de operar como aliciente para la actividad política funcionan como aislante. La falta de autonomía de los gobiernos locales los convierte en piezas del aparato gobernante central y, en esa medida, pierden su carácter de plataforma para la participación y el ejercicio local del poder. El papel de las instituciones locales se ve desvirtuado en la misma proporción en que la toma de decisiones se mueve hacia el centro del sistema de gobierno. Al carecer de una vida política local autónoma, los agentes sociales ven entorpecida su participación en la sociedad global, pues sus expresiones inmediatas son impermeables a la iniciativa de esos agentes sociales. El centralismo inhibe el desarrollo de una cultura política de carácter participativo y consolidada, en cambio, actitudes de súbdito colocado a la espera de las soluciones de arriba.

Los perjuicios del centralismo se multiplican por el hecho de que no sólo el centro castra la iniciativa política del conjunto sino que, en el propio aparato central hay una concentración desmedida del poder político en el Ejecutivo Federal. La posibilidad de participación política no sólo está afectada por la falta de autonomía de los gobiernos locales sino, además, también por la falta de autonomía de los otros poderes, Legislativo y Judicial. Centralismo y presidencialismo conforman una mancuerna siniestra porque la política deja de ser mediación colectiva de intereses para abrir paso al autoritarismo. Es claro que autoritarismo y participación política son incompatibles. Donde el peso de la Presidencia convierte a su titular en *mediador universal*, en detrimento de la actuación de otros poderes y agencias institucionales, la actividad política tiende a confundirse con la maniobra cortesana y la discusión pública tiende a ser sustituida por el secreto burocrático y el rumor expansivo.

En la lista de factores que obstaculizan la participación política no puede dejar de incluirse la cuestión del atraso cultural. La sociedad mexicana está todavía conformada por millones de analfabetas, cuyo número es mayor si se considera el analfabetismo funcional, y el promedio de escolaridad continúa siendo bajísimo, lo que redundará en un precario dominio de información elemental y, por supuesto, escaso nivel de formación política. Es igualmente indispensable aludir a formas de despotismo que perviven aún y juegan algún papel en separar a la gente de la política: el asesinato de agraristas sigue ocurriendo con descorazonadora frecuencia en el campo mexicano y resultaría sorprendente descubrir, con investigaciones minuciosas al respecto, la facilidad con que las industrias despiden trabajadores destacados en la defensa de los intereses gremiales. La apertura política que se vive en México en escala macrosocial, muchas veces no encuentra paralelo en el nivel micro.

Por último, podría decirse que el país vivió durante varios decenios en una situación de baja motivación estructural para participar en la vida política.

Ello se debió al consenso generalizado en los distintos sectores de la población, tanto en las clases dominantes como en el bloque social dominado, en el sentido de que la política gubernamental, o bien avanzaba hacia la realización de los objetivos de la Revolución de 1910, o hacía posible el crecimiento económico y la modernización de la sociedad, de manera que -a pesar de las profundas desigualdades- el conjunto de la población mejoraba sus condiciones de vida. Clases propietarias atrídas por los estímulos a la acumulación privada, sectores medios en rápida expansión con creciente capacidad de consumo, campesinos beneficiados por el reparto agrario o esperanzados en la resolución de los trámites, obreros y empleados con mayores posibilidades de seguridad social, educación y niveles de vida que se comparaban favorablemente con el pasado. El mito de una sociedad en vías de desarrollo que se acercaba al momento en que podría satisfacer las necesidades de sus habitantes parecía corresponder con la realidad, no obstante los inevitables conflictos y circunstancias que ensombrecían el panorama.

Casi todos los factores que se oponen al incremento de la participación política siguen en vigor y, sin embargo, no hay duda de que en los últimos años México ha experimentado un proceso relativamente acelerado de politización. En el ámbito de las clases propietarias, los vacilantes proyectos

reformistas de Echeverría y, sobre todo, la nacionalización de la banca a finales de la administración de López Portillo, condujeron a la politización de la iniciativa privada. La creación del Consejo Coordinador Empresarial a mediados de los 70's marcó el comienzo de un ciclo que aún no termina y que ha llevado a un número cada vez más amplio de dirigentes patronales a participar en forma abierta en eventos y agrupaciones políticas, fortaleciendo sus ligas con el PAN. No obstante los esfuerzos del gobierno actual por restablecer los



lazos de complementariedad que caracterizaron desde 1940 las relaciones entre clase dominante y grupo gobernante, aquélla parece dispuesta a no cejar en su oposición al gobierno hasta lograr cambios sustanciales en el Estado de la Revolución Mexicana que vuelvan imposible medidas como la del 1o. de Septiembre de 1982.

Gran parte de los sectores medios han sido ganados con rapidez para las posiciones de la derecha política. Politizaron su percepción de la realidad aunque con esquemas burdos y simplistas. En algunas zonas del país más que en otras, parecen dispuestos a una mayor participación electoral y a vigilar el respeto al voto. Propensos a un fácil antigobiernismo de derecha, esos sectores viven la crisis económica como resultado directo de la corrupción y la ineficiencia públicas. Si antes la sensación de acercamiento ininterrumpido a la prosperidad los volvía ajenos y hasta despreciativos de la política, ahora la idea de que los responsables de la cosa pública asestaron un golpe decisivo a sus aspiraciones los convierte en una masa susceptible de ser llevada a compromisos políticos más enérgicos. Hasta la fecha, sin embargo, no se puede hablar de un decidido viraje de esos sectores hacia la participación política; todo ha quedado limitado a una mayor predisposición antigubernamental.

La aparición de numerosas organizaciones sociales en el campo y en las colonias populares de las ciudades es un índice elocuente de la creciente participación política en estas zonas de la sociedad. Tal vez el dato más significativo en estos movimientos sociales es la profundidad de su ruptura con el PRI. Hasta hace algunos años todo el movimiento social generado en el campo y en la periferia de las ciudades, era prontamente integrado en las estructuras políticas del partido oficial. En los últimos tiempos, sin embargo, tal integración es casi inconcebible y el repudio al partido del Estado en ocasiones se extiende hasta alcanzar a toda forma partidaria lo que ha contribuido a mantener el contenido político de esos movimientos sociales en el marco de ciertos objetivos específicos, sin que su actividad se concrete en líneas más amplias de participación política.

En cualquier caso, parece haber llegado a su fin la prolongada etapa de sólido consenso y fuerte hegemonía priísta, por lo que puede esperarse en el futuro próximo el fortalecimiento de la tendencia a mayor participación política. Una predicción de esta índole tiene en su contra el hecho de que hasta

el momento la clase obrera no da muestras de orientarse hacia una mayor actividad política. Varios años consecutivos de deterioro salarial no han modificado el comportamiento básico de los asalariados. El sindicalismo ha funcionado más como aparato protector del sistema de gobierno y prácticamente ha diluido inclusive su función como agencia de negociación de las reivindicaciones populares y, sin embargo, ello no ha colocado a los trabajadores en la búsqueda de recuperar la autonomía sindical. De este modo, si en México siguen siendo bajos los niveles de participación política, ello se debe en buena medida al marasmo de la actividad sindical. ■

